

LUCHA POR LA TIERRA Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO ENTRE LOS "QUINTEROS" DEL PARQUE PEREYRA IRAOLA

*Eugenia Morey**

Introducción

En este trabajo analizaremos el surgimiento de nuevas formas de organizar el trabajo entre los horticultores familiares que habitan en el Parque Pereyra Iraola (PPI), provincia de Buenos Aires, a partir de la necesidad de elaborar estrategias de lucha política frente a los intentos de desalojo por parte del Estado provincial.

En primer lugar, describiremos algunas características demográficas y productivas de los productores estudiados, haciendo especial referencia a la tenencia de la tierra, y las condiciones de disputa por su usufructo. Seguidamente, consideraremos el proceso de lucha y organización social de los quinteros ante la posibilidad de ser desalojados por parte del Estado. Centraremos la atención en las transformaciones ocurridas hacia el interior del grupo tanto en la participación, como en la elaboración de nuevas estrategias económicas, analizando cómo estos actores sociales se presentan en el marco de las nuevas políticas sociales desplegadas por el Estado.

Los quinteros en el Parque Pereyra Iraola

La población estudiada, se asienta en el PPI, ubicado en la provincia de Buenos Aires, a 20 km de la Ciudad de La Plata y a 35 km de la Ciudad de Buenos Aires (República Argentina). Éstas 10.200 hectáreas de propiedad del Estado provincial, se distribuyen, en la actualidad, entre distintos organismos privados y públicos. Podemos identificar usos diversos: producción hortícola, paseo público, reserva ecológica, escuela de policía de la provincia de Buenos Aires, explotación forestal privada, gasoductos, acueductos, escuelas de enseñanza básica y media, asentamiento y vías de comunicación de importancia, que fueron subdividiendo la superficie total. En este trabajo nos centraremos en la población, que vive en los 189 lotes de 5 a 10 has. cada uno, dedicados a la producción hortícola.

* CIEA-IIHES-UBA.

Estas tierras fueron parte de un proceso de redistribución realizado hacia 1950, cuando el gobierno expropió a la familia Pereyra Iraola e hizo un llamado abierto a familias de productores para trabajar en un 10% de la superficie, manteniendo el resto de la misma para uso público y resguardo ambiental, ante el fuerte crecimiento de los centros urbanos mayores (Buenos Aires y La Plata).¹ Los primeros pobladores vivían en Buenos Aires o en el interior del país y en su mayoría eran migrantes europeos. Se asentaron en las distintas parcelas asignadas por contrato, por las cuales pagarían un canon anual y podrían renovar la tenencia cada 5 años. Las quintas estaban distribuidas en forma discontinua en la totalidad del Parque, conformando 12 sectores heterogéneos por calidad del suelo y por condiciones para su desarrollo. Hacia 1970, como en el resto del cordón hortícola, hubo una fuerte migración boliviana,² pero en el PPI existía un coyuntura especial. En este periodo el Estado había redefinido los objetivos para sus tierras en el Parque priorizando usos propios -permiso de uso a favor del Ministerio de Defensa y organismos de seguridad- restringiendo el uso público o productivo. Así se inicia una fuerte inestabilidad en la tenencia y utilización de las tierras agrícolas que traía consigo una heterogeneidad de productores: quinteros asentados, medieros y ocupantes con una multiplicidad de actividades económicas desplegadas para subsistir. Si bien la actividad económica central era la horticultura, la comercialización y las actividades no agrícolas, dadas las cercanías con los centros urbanos más importantes del país, también posibilitaron otras formas de garantizar la reproducción de la población. La competencia territorial con el propio Estado por el uso de las tierras hizo que las relaciones no estuvieran exentas de tensiones. Asimismo, entre los distintos pobladores de las tierras en "arriendo" -quinteros, medieros y ocupantes-, si bien la vecindad implicaba una base de confianza y cooperación, también llevó a conflictos potenciales por la competencia en el uso de la tierra.

Actualmente, la población que habita las tierras hortícolas del PPI comprende 300 familias que trabajan 189 lotes. Entre ellas 20% llegaron al lugar hacia 1950, 50% hacia 1970 y 30% en los últimos 5 años. El porcentaje de familias de origen boliviano es 40%, que en su mayoría ha comprado mejoras o ha comenzado con mediería en el lugar. A partir de un relevamiento productivo y de origen de la población realizado en 2000,³ nos encontramos con una distribución de titulares por lote donde hay: 58 lotes que se mantienen con el

1 Decreto de expropiación 1465/49

2 Benencia, R. "Área Hortícola Bonaerense. Cambios en la producción y su incidencia en los sectores sociales". Ed. La Colmena, Bs As.1997 y Feito, C. "Formas de organización del trabajo en las quintas" en Benencia, R. coord. "Área Hortícola Bonaerense" Ed. La Colmena, Bs.As.1997.

3 Informe de pasantía 2000 UNLP-UBA. El total de lotes varía al haber algunos ocupados por organismos oficiales y otros improductivos.

mismo titular, 64 donde viven sólo medieros y 52 pertenecientes a quienes nunca accedieron a contratos y se reconocen como ocupantes. En este sentido, es que inferimos que 116 quintas fluctúan entre la mediería y la ocupación. Por lo general, los medieros que llegan a quedar en una quinta como ocupantes tienen una antigüedad mínima de dos años de trabajo allí. Asimismo, debemos llamar la atención en torno a pensar la mediería como un camino hacia la titularidad, ya que también existen los casos inversos que comenzaron siendo titulares y hoy realizan trabajos de mediería en quintas vecinas. De esta manera, la titularidad de la quinta no implica una dirección indiscutida de la producción de hortalizas sino que depende de cómo se constituyó esta relación.

Hacia 1992 la titularidad en las quintas es cuestionada abiertamente por parte del Estado, iniciando pedidos de desalojo o recomendando no renovar contratos. En la misma línea, abierta por los gobiernos militares, se priorizan otros usos en las tierras. Estas medidas se profundizaron en 1998 cuando se desaloja a dos familias y se extienden los juicios de desalojo a todos los quinteros que tenían contratos de tenencia al tiempo que no se permiten nuevos contratos para agricultura en las parcelas desocupadas. Es decir, la población del PPI es leída desde el Estado como una totalidad homogénea donde todos son reconocidos como ocupantes. Coincidimos con Balazote y Radovich⁴ cuando sostienen que *"la población, así presentada, es una "abstracción" dado que despojada de sus condiciones sociales de existencia resulta simplemente la "representación caótica del todo"*. Nuestra intención es alejarnos de la "representación caótica del todo", en palabras de Marx, para retornar sobre las reales condiciones sociales de existencia y sus relaciones diversas.

Las familias de quinteros, ocupantes y medieros configuran un escenario heterogéneo económicamente. Las actividades productivas son: la horticultura, granja y apicultura. Pueden ser caracterizados como productores familiares, con una organización doméstica de producción, siguiendo la definición de Archetti y Stölen de grupo doméstico como aquel *"basado en el parentesco que regula el conjunto de derechos y obligaciones sobre la propiedad y como un sistema de relaciones sociales que, basado en el principio de residencia común, regula y garantiza el proceso productivo"*.⁵ Encontramos sin embargo una limitación en torno a la capacidad de estos productores para regular sobre la propiedad, cuando es el Estado el que establece estos parámetros. De todas maneras, haciendo un recorrido por la historia de las quintas que han mantenido la producción desde comienzos del PPI, podemos dar cuenta de esta lógica dado que hay una tendencia a prolongar la producción entre los miembros de la unidad doméstica (hijos o nietos de los primeros titulares, familias asociadas, que residen y producen en la misma quinta).

4 Balazote, A. y Radovich, J.C. "Multiculturalidad y economía: El caso del interfluvio Teuco-Bermejito". En Runa, 2001.

5 Archetti, E. y Stölen, K. A. "Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino" Ed. Siglo XXI. Buenos Aires, 1975, pp 50.

No obstante, ajustarnos a esta definición no nos permite dar cuenta de las diferencias existentes entre las quintas, así que consideramos que si bien pueden haber partido desde una misma condición, no todas llevaron el mismo recorrido, y de hecho el PPI no muestra una estructura homogénea. Ahora bien, los procesos de diferenciación ocurridos pueden ser considerados desde dos aspectos. Por un lado, aquellas microdeterminaciones de las unidades domésticas en torno a la relación entre los trabajadores y los consumidores que las integran, es decir su composición. Y, por otro lado, aquellos condicionantes político económicos, que exceden las relaciones intradomésticas e interdomésticas, y relacionan esta forma de organizar la producción en el marco del sistema económico más general, otorgándole ciertas ventajas respecto de otras formas en tanto garantía de reproducción social y económica que le permite al capital unas ganancias extras,⁶ en principio en término de salarios no pagos.

Para distinguir entre las estrategias productivas de estos quinteros, su dinámica y las diferencias presentes entre las distintas unidades productivas podemos observar dos elementos: disponibilidad de tierra y capacidad de reinversión. Desde este recorte se pueden considerar los procesos de: "expansión", "estancamiento", "desplazamiento", "pauperización" y "pluriactividad", en los términos definidos por Murmis para el agro argentino.⁷ Ahora bien, con la crisis económica se encuentra un fuerte cruce entre titularidad y mediería en una misma unidad. Así, el abandono de la actividad hortícola por parte de los jóvenes que buscan "changas" en trabajos urbanos (docencia, comercio, transporte, etc.), se incrementó con la presión constante de los últimos años para regularizar la tenencia de la tierra.

Vale señalar que una dificultad mayor para estos productores se sitúa en la instancia de comercialización. En 2001, un 48% realizaba comercialización directa de la producción, tanto en la quinta propia, en puestos del mercado -Quilmes, Berazategui, La Plata, La Matanza, MCBA- como en verdulerías. La presencia de consignatarios ronda el 52% restante e implica para los quinteros una de las cuestiones críticas de su situación, ya que los acuerdos en torno a los precios y la garantía de cumplirlos está relacionada al manejo de información de las condiciones de venta del consignatario.

El conflicto, organización interna y estrategias económicas

La respuesta por parte de los productores ante esta homogenización por parte del Estado fue la organización en tanto productores hortícolas del PPI.

6 Balazote A. y Radovich J.C. "El concepto de Grupo Doméstico". En H. Trinchero (comp.) *Antropología económica* Vol. 2. CEAL Buenos Aires. 1992, pp. 29-43

7 Murmis, M. "El agro argentino. Algunas consideraciones para su análisis" en Giarraca y Cloquell (comps), *Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales*. Editorial La Colmena, 1998.

El reconocer las condiciones socioeconómicas en las que se habían desarrollado como habitantes del lugar fue el primer elemento puesto en común para generar los espacios de diálogo colectivo que les permitió elaborar estrategias de acción conjunta frente a las demandas del Estado. En este sentido, los niveles de participación en el conflicto se limitaron, al principio, según la condición de los productores (titulares, medieros y ocupantes), ya que las diferencias entre productores aparecían como posibles garantías de permanecer en el lugar ante el gobierno. Cuando el reclamo del Estado dejó de ser la deuda en el pago del canon y se generalizó al uso de las tierras, entre los quinteros la participación también se amplió. Las discusiones por las condiciones de tenencia incluían también la formas de producción y comercialización. Así, se redefinía el lugar ocupado por los productores en este proceso de construcción política para garantizar la permanencia en el lugar y para buscar garantías de reproducción económica. Finalmente, en el marco de la participación en organizaciones más amplias de pequeños productores se fueron multiplicando las alternativas encontradas y las demandas hacia el Estado. En consecuencia, los condicionantes para el uso de las tierras dieron forma a un tipo particular de horticultor y, en este sentido, las disputas hacia 1998 reconfiguraron las relaciones entre los propios productores y con el Estado.

A partir de los desalojos hasta 2002, se suscitaron distintos grados de violencia por parte del Estado con múltiples mediaciones. El carácter compulsivo de los desalojos y otros distintos ataques, que incluyen dos confusos asesinatos a militantes de la Asociación Civil de Pequeños Productores del PPI, parecieron mostrar una postura irreconciliable del gobierno con los quinteros. Conforme a los lineamientos del neoliberalismo, el Estado debía responder a los intereses de los sectores más cercanos al gobierno y más concentrados económicamente. Estos podían ser, tanto los intereses del capital inmobiliario, como los de sectores vinculados al poder militar/policial o los de funcionarios que vieron en ese pulmón verde una entrada a los distritos más conflictivos del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. En ese lugar, y en ese momento, los pequeños productores hortícolas no fueron considerados como posibles habitantes de esas tierras del Estado.

Sin negar las heterogeneidades, la lucha social unificó a los productores bajo ciertos criterios de acción. En un proceso dinámico abierto, desde los primeros años, el "desalojo" apareció como aglutinante de experiencias históricas diversas y proyección a futuro, con la *modificación de pautas sociales y económicas de estos actores*.

Ante la violencia física por parte del Estado, hacia 1998, fue necesario generalizar la búsqueda de apoyo. Así, desde las experiencias anteriores, se retomaron parámetros que permitieron un primer nivel de organización colectiva de los productores del PPI. La generalización del conflicto llevó a la necesidad de redefinir quiénes eran los quinteros, y el elemento aglutinante re-

sultó ser el trabajo en las quintas, incluyéndose así medieros y ocupantes como actores presentes. En este proceso aparecieron espacios nuevos hacia fuera del grupo mediante un acercamiento a la CTA (1998). Las experiencias de otras organizaciones y las propias, impulsaron la creación de una Asociación de pequeños productores del PPI (1999). Así, también podían participar de la gestación de un espacio nuevo de nivel nacional: la Mesa Nacional de Productores Familiares (1999). Otros actores, como por ejemplo los distintos proyectos de extensión universitaria de la UBA y UNLP, se irían acercando a partir de la lucha social (Agronomía, Trabajo Social, 2000).

Hacia 2001 la organización conformaba una cooperativa de comercialización que se proyectó, por un lado, como estrategia política para defender sus derechos de habitar y trabajar, por otro, como salida económica que permitiría saldar el principal límite para la pequeña producción, el que consistían las vías de comercialización. El desarrollo de las instancias organizativas también posibilitó a los habitantes del PPI el acceso a planes sociales tanto como la proyección de distintos emprendimientos productivos y de comercialización. La participación colectiva permitió modificar el lugar otorgado al asesoramiento técnico, demandando para sí un perfil de técnicos, en particular en el caso del programa Cambio Rural. Asimismo, se ampliaron las demandas más allá de lo estrictamente productivo hacia mejoras en la escuela a la que asistían los hijos de productores. Se abrieron espacios de participación dentro de esa institución involucrando a los productores en la creación de un jardín de infantes para la escuela EGB del PPI (2002).

Las distintas instancias organizativas permitieron presentarse a los miembros de la Cooperativa de productores y la Asociación ante el Estado como interlocutores de la población del PPI. De allí hasta llegar a la primer experiencia de comercialización en julio de 2002 fue necesario un amplio accionar y reposicionamiento de las relaciones sociales dentro y fuera del PPI.

La presentación colectiva ante el Estado fue construyéndose a partir de distintas experiencias de distintos grupos de quinteros. Algunos habían comenzado su experiencia de acción conjunta hacia 1995, de acuerdo a lazos de amistad o cercanía para acceder a alguna instancia de negociación de deudas o contratos. Buscaron asesoramiento legal y productivo por medio de la iglesia que se ubica dentro del PPI. Los lazos de unidad y continuidad en el tiempo fueron débiles, pero sentarían un precedente.

"En el '95 comienzan a llegar las cartas de desalojo. Se realiza la primer reunión de quinteros en la Capilla Santa María, que luego continúa en la escuela, y se toma contacto con gente de Cambio Rural." (quintera, 40 años)

"Yo también pagaba, así que me puse un abogado, hice la denuncia y ahí empecé a luchar hasta ahora, después vino el desalojo en el '96 y desde ese entonces era caminar, fiscalía, hablar, pedir audiencia con el Ministro. Todo con unas vecinas, no había ninguna asociación no había nadie, caminábamos cada uno por su lado". (quintera, 58 años)

Las acciones grupales comienzan a repetirse, no sólo mediante entrevistas con los distintos funcionarios sino además con presentación de notas, so-

licitudes y petitorios. Esta iniciativa es una primera experiencia en un grupo de quinteros para quienes la relación con el Estado es diferente a la de la primera generación de quinteros. Incluye productores nuevos, sea por que se incorporan a la actividad hortícola tomando la dirección de la parcela o regresando a ella.

Desde el Estado no se perdonan las deudas, pero se redujo el valor del canon a partir de la continuidad de las acciones de los quinteros. Hacia 1996, un grupo de quinteros toma la iniciativa de proponer una auto evaluación de la productividad media de una quinta del PPI, para apoyar su pedido de revaluación del precio del canon. Sin embargo la respuesta del gobierno indica que:

"No resulta conveniente, en esta oportunidad, la tasación pedida, siendo menester previamente la concreción de un plan integral, regulador de las tierras que tienda a su protección y razonable explotación, como así tampoco la suspensión de los juicios propiciados." (Respuesta de la Fiscalía de Estado por nota).

Aunque el Estado no reconoce la presión, de hecho reevalúa el canon por debajo del valor anterior. Al mismo tiempo, generaliza la problemática del PPI al resto de las tierras. Esta respuesta podría vincularse a la acción de los quinteros de buscar apoyos en otras instituciones próximas, como la escuela y la iglesia, que también comparten el lugar.

La experiencia de propuesta desde los quinteros al Estado, tiene dos resultados, por un lado se realiza la primer colectivización de la información, por otro, se procede a contar como viven los quinteros en el PPI. Los lugares comunes, abiertos al total de la población, luego serían retomados y reivindicados como lugares de reunión. Si bien podemos decir que las primeras alianzas a las que apelan no salen de los marcos conocidos (maestros, abogados, cura y asesor agrónomo), también se inicia un proceso de cambio en tanto la negociación la hace un grupo de quinteros que previamente discuten su propuesta.

En esta etapa, la reivindicación más visible en las entrevistas y también en los medios, es por el valor del canon. Pero es un valor discutido desde los quinteros, que proponen un criterio distinto al del Estado.⁸ La estrategia desplegada por parte del Estado en esta instancia parecía ser la coerción económica y jurídica y la búsqueda de consenso en términos de la división de los quinteros de acuerdo a estas diferencias. No se explicita una acción grupal que distinga entre medieros y ocupantes pero, es importante señalar que, discutir el pago del canon restringía la inclusión de los productores presentes a los que poseían contratos.

8 Según un modelo de contrato que nos brindaron en las oficinas del PPI, el canon por hectárea por año era de trescientos ochenta pesos, valor de canon mucho menor que el discutido anteriormente, para los contratos anteriores a 1999

Cuando el Estado "reconoce" las diferencias

Hacia 1998, cuando se producen los desalojos, desde el gobierno se recurre a la diferenciación entre los quinteros según el tipo y los niveles de la producción. Dada la heterogeneidad de los quinteros en el PPI, el desalojo de quintas no productivas parecía apuntar a atenuar la reacción del resto de los productores. Sin embargo, la primera reacción entre los *quinteros* fue de solidaridad con sus vecinos. Vale aclarar que, desde la Administración del lugar no se recibía a nadie que no tuviera contrato, fuera o no responsabilidad propia la existencia de los mismos.

Desde los comienzos del conflicto se extendieron las diferenciaciones respecto a la legitimidad de quienes vivían en las quintas y no lograban un nivel de producción que les permitiera tener una parte en producción y algún acceso al mercado, sea minorista o mayorista. En este sentido, la división entre quinteros "titulares" y medieros apareció ligada a la participación en las asambleas para programar estrategias a seguir, cuando se discutieron los límites normativos que postulaba el gobierno. Identificar el problema con las deudas, si bien más agudo que en otros momentos, restringía el conflicto a quienes no habían logrado mantenerse, en un nivel económico "adecuado". La división entre quinteros (titulares), medieros y ocupantes (recientes), aparecía inicialmente como legítima en el conjunto de los quinteros.

A medida que el conflicto se extiende y con la creación de la Asociación de productores, las diferencias se van disipando, sobre todo entre los quinteros menos capitalizados, los medieros y los ocupantes recientes. La participación en el conflicto tiende a polarizarse entre quienes pueden irse del PPI y aquellos que no tienen mejor alternativa que afrontar la lucha por sus derechos.

La primer instancia organizativa que los agrupó en un lugar común posibilitó el acercamiento de los distintos sectores, una estrategia que se retomaría a lo largo del conflicto. El mismo día de los desalojos y en menos de un mes los quinteros resolverían organizar tres movilizaciones hacia La Plata, y así el encuentro se abre hacia otros actores por fuera del PPI. La consigna era el regreso de las familias desalojadas y la suspensión de los desalojos. El primer logro es la suspensión de los desalojos hasta una valuación de un nuevo canon y "*la concreción de un plan integral que regule la explotación de estas tierras*" (declaraciones de uno de los quinteros al diario Hoy 10/10/98). Así la acción de protesta posibilitó un piso de confianza entre los quinteros para dejar de lado las divisiones entre medieros y titulares que tomaban como base de unidad el trabajo en tierras "ajenas".

El acuerdo con el gobierno provincial establecía la suspensión de acciones hasta realizar un relevamiento, pero no tardan en llegar nuevamente cédulas de desalojo, antes del plazo esperado. En esta etapa se apunta a los quinteros más involucrados en el conflicto. Por su mayor antigüedad en el lugar, y la pérdida que podía implicar un desalojo, parecía una medida que garantizaba la desmovilización. Sin embargo, si bien no se produjeron nuevos en-

cuentros con el despliegue policial anterior, se quebró el acuerdo de frenar el proceso de desalojos. Así, se proponía desarmar la medida de protesta -cortes de ruta y tractorazos a La Plata- y la alianza con sectores más contestatarios como CTA-FTV. La movilización de quinteros se había trasladado y tenía continuidad en un sector más "visible", en cuanto a la cercanía de los puntos neurálgicos del lugar (sede de la Administración, caminos Centenario y Belgrano, Capilla, Escuela). Hubo un traspaso que excede lo geográfico, y es que la participación de los productores comenzó a modificarse. Al tiempo que los desalojos ya no eran para quienes "no producían" en sus quintas, sino que, implicaba también a los más prósperos, hubo una participación más activa de medieros y quinteros recientes en las instancias colectivas. Igualmente los acuerdos entre productores no se dieron inmediatamente ya que hasta el momento no todos habían recibido las cédulas de desalojo. En ese contexto uno de los sectores afianzó alianzas con el Municipio y la Iglesia, confiando en que la resolución del conflicto era acallarlo.

En este proceso se buscaron diferentes canales para hacerse escuchar, entre audiencias con el Ministerio, recorridos por la legislatura buscando el apoyo de distintos funcionarios, la solidaridad con otras organizaciones, y la alianza con otros sectores vinculados al campo o al conurbano. Se incrementaron distintas formas de participación como asambleas, reuniones, charlas, sea en la escuela, la iglesia, alguna quinta, y con mayor continuidad en una carpa instalada en el centro del PPI, ubicada entre los accesos al parque por los caminos que se dirigen a La Plata, y que se levantara como forma de protesta pública.

Este lugar más visible y abierto posibilitó que otros sectores que participaban también de otras protestas y conflictos en la zona se acercaran e intercambiaran experiencias. Así, se iniciaron lazos con sectores no agrarios conformando un espacio de reclamos territoriales.⁹ Se acercaron a "la carpa", docentes de la zona, comisiones de asentamientos cercanos con problemáticas de documentos, asociaciones de medieros, y otras organizaciones de pequeños productores. Así, en abril de 1999, el reclamo de los quinteros del PPI, era incluido en las exigencias que la CTA presentaba en la legislatura bonaerense, siendo apoyada por una manifestación que partía de la carpa del PPI hasta La Plata con 1200 personas, unificando una serie de reclamos para frenar desalojos en distintos asentamientos.

Las nuevas alternativas

El acercamiento entre titulares medieros y ocupantes y la participación en la organización comenzó a darse de manera más repartida. No fue un pro-

9 Federación de Tierra y Vivienda de la Central de Trabajadores Argentinos.

ceso armónico puesto que dadas las relaciones establecidas entre los distintos productores, la legitimidad del trabajo en las tierras como condición común a partir de la que plantearse la construcción social de una identidad tenía detrás historias de explotación y desacuerdos. En principio, la participación en los ámbitos colectivos empezó a abrirse a los medieros que trabajaban quintas solos. Este grupo excluía a aquellos titulares que no habitaban el PPI o tenían otros recursos. En sí, hacia adentro de la organización, las diferencias dejaron de ser económicas para pasar a ser políticas, en torno a las estrategias de lucha y resistencia para defender sus derechos. En este sentido, hubo un corte en el tipo de conflicto y de quinteros entre octubre de 1998 y marzo de 1999, que ellos identifican como la primer carpa, y entre Abril de 1999 y noviembre de 1999 o segunda carpa.

La evidencia de inestabilidad fue uno de los puntos de contacto entre los distintos quinteros. Al respecto, señalaba un quintero hijo de medieros:

"Ya antes en el '92 había llegado una intimidación, pero un abogado los paró, estos desalojos. Primero pensé que iba a ser como decían antes, que era temporal o por política, pero ahora está más brava la cosa, empezaron a apretar, antes te amenazaban pero no te sacaban, ahora vinieron a sacar a uno y mucha gente ya tiene miedo, se van solos, ya no estamos sembrando nada, para qué meterse en gastos". (Quintero, 19 años)

Sin establecer alianzas excluyentes, quienes tenían acceso a los funcionarios provinciales, municipales o eclesiales, apelaron a ellos para mediar en el conflicto. Por su parte, un sector ligado a cierto espacio gremial, por propia historia, tomó como base para una confianza mínima la experiencia de lucha, para otorgarle así un lugar de mediador, tanto a representantes gremiales, como, más tarde, a universitarios, técnicos agropecuarios y legisladores provinciales relacionados a alguno de estos sectores.

Si bien fue el gobierno quien propuso un relevamiento integral del PPI, nunca lo realizó. Entonces, el "estudio" se convirtió para los quinteros en uno de los argumentos que permitía ganar tiempo y experiencia. El primer acuerdo había sido suspender los desalojos, y fue así que, en junio de 1999, lograron presionar lo suficiente en la legislatura bonaerense para que sancionara una ley que prorrogara los desalojos por 180 días. La extensión del conflicto, y los logros obtenidos permitió el acuerdo entre quinteros, medieros y ocupantes para armar una asociación que los nucleara. Los términos del acuerdo giraron en torno a las necesidades de presentarse ante las instancias institucionales de negociación como un colectivo reconocido y no como una suma de individualidades. Asimismo, implicaba la posibilidad de elaborar alianzas suficientes como para proponerse un relevamiento integral propio que se centrara en los problemas específicos de los productores. Fueron los productores, entonces, los que llamaron a técnicos de Cambio Rural de la zona y a organizaciones de productores familiares con experiencias distintas de organizaciones a nivel regional y nacional para realizar un auto relevamiento de la población del PPI, su situación productiva y las distintas ocupaciones de las superficies no agrícolas.

Para esto, se realizaron reuniones por sectores sin distinguir las condiciones legales anteriores (sean titulares, medieros u ocupantes) con el objetivo de relevar las problemáticas existentes, no sólo en torno a la permanencia en el lugar, sino en relación con el poblamiento, las relaciones internas, vínculo con la organización, y los niveles de participación. Así pudieron expresarse similitudes y diferencias entre los quinteros, desde cómo llegaron al lugar, los problemas que implicaban los posibles desalojos, las lecturas distintas según la antigüedad de los quinteros, la problemática entre quinteros, titulares u ocupantes y medieros y las posturas respecto a la organización que habían logrado. Al haberse constituido una asociación de quinteros en la que se incluían la mayoría, sin distinción más que estar trabajando una quinta del PPI, se presentó la posibilidad de ser ellos mismos quienes plantearan los parámetros para elaborar un proyecto de ley en torno al "reordenamiento del parque".¹⁰ En los distintos ámbitos de discusión se retomó la referencia al decreto de expropiación a partir del cual se resaltaba la *promoción de la agricultura como objetivo de las tierras que habitaban*.

Participar en el diagnóstico amplió los objetivos de frenar los desalojos y puso en discusión el vínculo entre los quinteros, los medieros y los ocupantes. La discusión permitía reconocer a los otros y a sí mismos, contar con las verdades particulares sobre los modos de vida. Así, se pusieron en común problemáticas productivas, educativas, legales, y la participación se fue ampliando. Por la dinámica del trabajo o por la experiencia previa, la participación familiar fue amplia. En los lugares más exigentes de la Asociación, por exposición pública y por las tareas vinculadas con el fortalecimiento de los lazos de pertenencia a la misma, ocuparon un lugar central las mujeres y los jóvenes. También, a partir del reconocimiento de las problemáticas comunes en torno al trabajo, la producción, la salud y la educación, se fueron generando marcos de acuerdos entre los sectores y entre los quinteros que permitirían proyectos comunes a futuro.

A modo de cierre

Distinguir posibles variaciones en torno a la estructura socioeconómica donde se ubica PPI, nos permite una caracterización de estos productores. Al considerar los distintos sectores interesados en ella -quinteros, gobierno o inversores privados- estamos indicando las presiones a las que se exponía a quienes trabajan las tierras. Así, la búsqueda de consenso por parte del Esta-

10 En cada publicación o entrevista a los funcionarios del Estado provincial aparecía un apartado referido a un "*Proyecto de recuperación*", resaltando que el PPI es parte de un "*pulmón verde del norte platense*", que debe retomar las tierras que fueron "*cedidas a terceros o directamente usurpadas*". Véase el diario platense *El Día* de las fechas: 21/11/98, 28/11/98, 16/3/99, 17/3/99, 23/4/99, 12/3/00, 17/4/01, 1/6/01, 6/6/01

do para promover una resolución del conflicto encontró en los quinteros más organizados una respuesta activa sobre la conformación de objetivos comunes: la tierra para quien la trabaja, un desarrollo económico de la zona con alcances sociales distintos a la búsqueda del lucro individual y a expensas de la explotación de otros.

Dada la discusión sobre el uso de las tierras y la relación con la Ciudad de La Plata, los quinteros fueron construyendo su legitimidad en tanto pobladores del PPI apelando a la construcción de consenso por dentro y fuera del lugar. A partir del año 2001 se establecieron distintos emprendimientos con gremios y comedores de la Ciudad de La Plata que motorizaron el inicial funcionamiento de la cooperativa de comercialización. La organización para la protesta sentó las bases para la elaboración de formas de organización productiva y lazos de solidaridad intercambiando insumos y experiencias.

Hasta llegar a esta instancia se habían llevado adelante dos tipos de trabajos sociales. Por un lado, hacia dentro del PPI mediante distintas instancias de diálogo, desarrollándose, a partir de un año de trabajos de relevamiento con los distintos sectores de quinteros, Universidades, INTA, y Organizaciones de Productores Familiares, cursos de capacitación agraria, organizacional y legal para los integrantes de la asociación de pequeños productores del Parque. Por otro lado, estas instancias internas permitieron crear el marco necesario para plantearse una estrategia hacia fuera, para ejercer la presión necesaria que les permitiera seguir manteniéndose en el Parque Pereyra Iraola a pesar de las condiciones de ilegalidad respecto a la tenencia de la tierra, pero con un cada vez más fuerte marco de legitimidad para ello.

Bibliografía

Archetti E. y Stölen, K. A. Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires, 1975.

Azcuy Ameghino E. De la convertibilidad a la devaluación: el agro pampeano y el modelo neoliberal, 1991-2001. Congreso Mundial de Historia Económica, BsAs, 2002.

Balazote A. y Radovich J.C. "Multiculturalidad y economía: El caso del interfluvio Teuco-Bermejito". En Runa, 2001.

Balazote A. y Radovich J.C. "El concepto de Grupo Doméstico". En H. Trincherro (comp.) Antropología económica Vol. 2. CEAL Buenos Aires. 1992, pp. 29-43

Balazote A. y Radovich J.C. "Mercanchifles y cooperativas: un análisis del intercambio" En Runa 1989-90 pp137.

Benencia R. Área Hortícola Bonaerense. Cambios en la producción y su incidencia en los sectores sociales. Ed. La Colmena, Bs As., 1997.

Benencia R. Cambios en la organización social de la horticultura bonaerense: migración limítrofe y adopción tecnológica. En Trincherro H. (Editor) Producción Doméstica y Capital. Estudios desde la antropología Económica, ed. Biblos, Bs.As., 1995.

Feito, M.C Evaluación de la implementación del programa Cambio Rural en el Área Hortícola Bonaerense: operatoria, logros obtenidos y cuestiones pendientes. Ponencia en Segundas Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, UBA, noviembre, 2001.

Feito, M.C. Juego de espejos. Un estudio antropológico sobre las estrategias de los sujetos sociales del sistema agroalimentario hortícola bonaerense, Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 1998.

Feito, M.C. Formas de organización del trabajo en las quintas. En Benencia R. (coord.) Área Hortícola Bonaerense. Ed. La Colmena, Bs.As., 1997.

Murmis, M. El agro argentino. Algunas consideraciones para su análisis. En Giarraca y Cloquell (comps), Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales. Editorial La Colmena, Bs.As, 199.